

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

/ Lima, seis de agosto de dos mil diez.-

VISTOS; los recursos de nulidad interpuestos por los encausados Elmer Gonzáles Díaz, Juan Zevallos Benavides e Hilario Porfirio Medina Vásquez, contra la sentencia de fecha veintinueve de diciembre de dos mil nueve, obrante a fojas ochocientos sesenta y cuatro; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra Flores; y **CONSIDERANDO: Primero:** Que, el encausado Hilario Porfirio Medina Vásquez al fundamentar su recurso de nulidad, obrante a fojas ochocientos setenta y nueve, alega que la sentencia recurrida transgrede el principio constitucional del *indubio pro reo*, debido a que de autos surge una serie de hechos contradictorios que ponen en duda su responsabilidad penal en los hechos investigados; precisa, que se le condenó en mérito a la imputación a nivel preliminar y judicial que le efectuó el supuesto agraviado Víctor Gonzáles Villalobos, quien de manera vaga sostuvo que el recurrente influyó en los ronderos para que éstos no lo entreguen a la Policía Nacional de la ciudad de Cutervo, lo cual no ha sido corroborado con medio de prueba alguno; de igual forma, los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides al fundamentar sus recursos de nulidad, obrantes a fojas ochocientos ochenta y uno y ochocientos ochenta y siete, respectivamente, refieren que no son integrantes de una ronda campesina, y que no se encontraron presentes en el lugar de los hechos que se reportan ocurridos el cinco de marzo de dos mil siete, a las dos horas de la madrugada aproximadamente, en el centro poblado menor de Sillarigate, comprensión del distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, y menos aún en el domicilio del agraviado Francisco Cruz Horna, sin embargo, ello no ha sido meritado por el

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA


R.N. N° 685-2010

LAMBAYEQUE

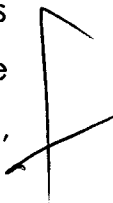
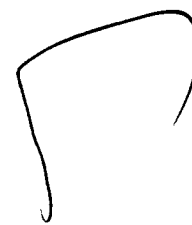

Colegiado Penal Superior que los ha condenado injustamente; indicando el encausado Elmer Gonzáles Díaz, que el décimo considerando de la sentencia recurrida resulta ser meramente enunciativo en referencia a su persona, por cuanto, en ningún momento ha sido despojado de la presunción legal de inocencia; y, que si bien su padre, Víctor Gonzáles Villalobos, en acto oral ha referido haber interpuesto varias denuncias en su contra, también lo es, que debe meritarse, que dicha declaración está cargada de odio, debido a que en su oportunidad, el mencionado agravado denunció a Javier Gonzáles Díaz (hermano del recurrente) por haberlo sorprendido teniendo relaciones sexuales con su mujer María Cándida Cruz Vásquez (testigo de cargo), por tanto, por rencillas personalísimas que tiene con su padre agravado se pretende justificar la condena impuesta; indicando por su parte el encausado Juan Zevallos Benavides, que el día de los hechos investigados, se encontraba atendiendo a su hijo Hernando Zevallos Carranza en la ciudad de Chiclayo, quien se encontraba gravemente herido, por tanto, merece ser absuelto de la acusación fiscal formulada en su contra. **Segundo:** Que el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve, establece que el pronunciamiento que efectúe esta Suprema Sala, debe estar estrictamente referido a los extremos que han sido materia de impugnación; por tanto, revisados los fundamentos de los recursos de nulidad interpuestos contra la sentencia recurrida, en el presente caso, se circunscribe al extremo condenatorio contra los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, como autores, e Hilario Porfirio Medina Vásquez como cómplice del delito contra la Libertad Personal - secuestro, en agravio de Víctor

2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE



Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos; y contra los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides por el delito contra la Libertad - violación de domicilio, en agravio de Francisco Cruz Horna. **Tercero:** Que, según el sustento fáctico de la acusación fiscal, obrante a fojas trescientos ochenta y tres, se le imputa a los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, conjuntamente con otras veinte personas, aproximadamente, entre los que se encontrarían los procesados no habidos, Videlmo Montenegro Vásquez, Benedicto Zevallos Carranza, Javier Gonzáles Díaz y Asunción Pérez Benavides, que siendo las dos horas aproximadamente, del día cinco de marzo de dos mil siete, habrían ingresado en forma violenta al domicilio del agraviado Francisco Cruz Horna, sito en las cercanías del centro poblado menor de Sillangate, distrito de Querocotillo, provincia de Cutervo, quienes mediante la fuerza sacaron del interior al agraviado Víctor Gonzáles Villalobos (yerno de Francisco Cruz Horna), quien en dicho momento se encontraba descansando, indicándose que lo ataron y lo trasladaron a la plaza de Sillangate, lugar en el cual se encontraban otras cincuenta personas, aproximadamente; precisándose que mientras una persona lo cogía, se acercó el encausado Juan Zevallos Benavides y le propinó un golpe en la cabeza, diciéndole *"por no ofender a la Ronda no te pelo desgraciado"*, luego de lo cual lo subieron a la camioneta de Gabriel Ruiz de Pucará, para efectos de trasladarlo hasta la localidad de Chipuluc, en donde el Presidente de la Ronda, Videlmo Montenegro Vásquez lo llevó a su casa para que cene y descanse, que posteriormente a las once de la mañana del día seis de marzo de dos mil siete, lo trasladaron a la localidad de Cutervo con la intención de presentarlo ante la autoridad policial, sin embargo, antes de ello,



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

llegaron a la casa del encausado Hilario Porfirio Medina Vásquez, quien le sugirió al referido Presidente de Rondas, que aún no lo presenten ante la Comisaría, sino que lo regresen a la localidad de Chipuluc para ser presentado ante la Asamblea de la Ronda Campesina, lugar al cual retornaron a las seis de la tarde, aproximadamente. Debiéndose indicar que respecto al agraviado Paulino Gonzáles Villalobos, dicho dictamen acusatorio se limita a indicar en la parte final del sustento fáctico de los hechos denunciados e investigados, lo siguiente, "...han lesionado también al agraviado Paulino Gonzáles Villalobos... siendo liberados finalmente Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos al tercer día".

Cuarto: Que, por las conductas descritas, se les imputa a los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, ser autores, y, a Hilario Porfirio Medina Vásquez, ser cómplice, del delito contra la Libertad Personal – secuestro en agravio de Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos, delito penal encuadrado en el presente caso en el artículo cincuenta y dos del Código Penal, que sanciona penalmente a "El que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad"; de igual forma, se les imputa a los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, ser autores del delito contra la libertad, en la modalidad de violación de domicilio, previsto en el artículo ciento cincuenta y nueve del Código Penal, que sanciona penalmente a "El que, sin derecho, penetra en morada o casa de negocio ajeno, en su dependencia o en el recinto habitado por otro o el que permanece allí, refusingo la intimación que le haga quien tenga derecho a formularla...".

Quinto: Que, para efectos de resolver lo que es materia de controversia penal en el presente caso, resulta necesario destacar la doctrina legal establecida mediante el

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

Acuerdo Plenario número uno – dos mil nueve/CJ – ciento dieciséis, de fecha trece de noviembre de dos mil nueve, emitido por la Sala Penal Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, que trata el tema de las Rondas Campesinas y el Derecho Penal, en la cual se precisa que “....Los integrantes de las Rondas Campesinas cumplen, en principio, el requisito de pertenecer a un grupo cultural y étnico particularizado. En efecto, desde la perspectiva subjetiva, tienen conciencia étnica o identidad cultural: afirman rasgos comunes y se diferencian de otros grupos humanos – sienten que su comportamiento se acomoda al sistema de valores y a las normas de su grupo social, su conducta observable reflejan necesidad de identidad y de pertenencia-; así, incluso, se autodefinen como herederos de los Ayllus (pueblo inca) y como parte de los pueblos indígenas.....Desde la perspectiva objetiva, como elementos materiales, comparten un sistema de valores, en especial instituciones y comportamientos colectivos, formas de control social y procedimientos de actuación propios que los distinguen de otros colectivos sociales – su existencia tiene una vocación de permanencia-. Son expresiones del mundo rural – de algunos sectores de la población rural en ámbitos geográficos más o menos focalizados-, tienen características comunes en su organización, siguen determinadas tradiciones y reaccionan ante las amenazas a su entorno con ciertos patrones comunes – organizan de cierto modo la vida en el campo-, y han definido – aún cuando con relativa heterogeneidad – las medidas y procedimientos correspondientes basados en sus particulares concepciones....Es imprescindible, desde luego, que el Juez identifique con absoluta rigurosidad, caso por caso y no darlo como sentado, la existencia en los asuntos de su competencia de estos elementos, obviamente con ayuda pericial ...”. De igual forma, se indica respecto a los alcances de la jurisdicción especial comunal – rondera, que “El primer nivel de análisis que debe realizarse cuando se discute en sede penal una imputación contra integrantes de Rondas Campesinas por la presunta comisión de un hecho punible con ocasión de su actuación como rondero consiste en establecer si resulta de aplicación el artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución, es decir, si es de aplicación el denominado fuero especial comuna, en tanto en cuanto el reconocimiento de una

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 685-2010

LAMBAYEQUE

*jurisdicción especial constituye un límite objetivo a la jurisdicción penal ordinaria", identificando como elementos que comportan la jurisdicción especial comunal – ronderil: **A.** Elemento humano; existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico o cultural y por la persistencia diferenciada de identidad cultural. **B.** Elemento orgánico; existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. Las Rondas Campesinas, precisamente, en esa organización comunal que, entre otras múltiples funciones, asume funciones jurisdiccionales para la solución de los conflictos. Ellas cuentan con la necesaria organización, con el reconocimiento comunitario y con capacidad de control social. **C.** Elemento normativo; existencia de un sistema jurídico propio, de un derecho consuetudinario que comprende normas tradicionales tanto materiales cuanto procesales y que serán aplicadas por las autoridades de las Rondas Campesinas. Esas normas, en todo caso, como perspectiva central de su aceptabilidad jurídica, han de tener como fundamento y límite la protección de la cultura comunitaria, asegurar su mantenimiento y prevenir las amenazas a su supervivencia. **D.** Elemento geográfico; las funciones jurisdiccionales que determinan la aplicación de la norma tradicional, se ejercen dentro del ámbito territorial de la respectiva Ronda Campesina. El lugar de comisión del hecho, determinante de la aplicación de la norma tradicional, es esencial para el reconocimiento constitucional de la respectiva función jurisdiccional de la Ronda Campesina: las conductas juzgadas han de ocurrir en el territorio de ésta; precisándose respecto a lo señalado que estos elementos se une el denominado factor de congruencia. El derecho consuetudinario que debe aplicar las Rondas Campesinas no puede vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Se trata de una condición de legitimidad y límite material para el ejercicio de la función*

20

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

jurisdiccional especial comunal – ronderil..... En atención a lo expuesto será de rigor considerar como conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales y, por tanto, antijurídicas y al margen de la aceptabilidad del derecho consuetudinario, (i) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable – plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil-; (ii) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos; (iii) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido; (iv) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa – lo que equivale, prácticamente, a un linchamiento-; vi) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario; (vii) las penas de violencia física extrema – tales como lesiones graves, mutilaciones – entre otras"; refiriéndose respecto al rondero ante el Derecho Penal, que "El derecho a la identidad cultural y al ejercicio de funciones jurisdiccionales conforme al derecho consuetudinario está, púes, limitado a las reservas que dimanar del propio texto constitucional y de su interrelación con los demás derechos, bienes e intereses constitucionalmente protegidos. Así las cosas, los alcances de un tipo legal pueden restringirse en dos casos: A. Cuando la interpretación de los elementos normativos del tipo lo permita (interpretación del tipo conforme a la Constitución). B. Cuando sea aplicable una causa de justificación, en especial la prevista en el artículo veinte, inciso ocho del Código Penal: cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho....Lo expuesto guarda coherencia con el alcance del fuero comunal rondero. Desde el primer caso – supuesto de atipicidad de la conducta – se descarta de plano, por ejemplo, el delito de usurpación de funciones (artículo trescientos sesenta y uno del Código Penal) en la medida de que el rondero actúa en ejercicio de la función jurisdiccional comunal constitucionalmente reconocida y garantizada. También se rechaza liminarmente la imputación por el delito de secuestro (artículo ciento cincuenta y dos del Código Penal) puesto que el rondero procede a privar de libertad como consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional – detención coercitiva o imposición de sanciones-.....Asimismo cabe destacar que la actuación de las Rondas Campesinas y de sus integrantes no está orientada a obtener beneficios ilegales o fines de lucro, y – en principio- la composición y práctica que realizan tienen un reconocimiento legal, que las aleja de cualquier tipología de estructura criminal

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. Nº 685-2010
LAMBAYEQUE

(banda o criminalidad organizada) asimilable a aquellas que considera el Código Penal como circunstancias agravantes o de integración criminal (artículos ciento ochenta y seis, párrafo dos, inciso uno, y trescientos diecisiete del Código Penal). Efectivamente, su intervención se origina en un conflicto de naturaleza y trascendencia variables, que involucra a personas que reconocen en las Rondas Campesinas instancias conciliadoras, de resolución de conflictos y con capacidad coercitiva – uno de los atributos esenciales de la jurisdicción-. En estas condiciones, es de enfatizar que no es asimilable la actuación y la conducta, siempre colectiva, de sus integrantes a un delito de secuestro extorsivo y cuya presencia relevante en las estadísticas de la criminalidad nacional determinó las modificaciones y reformas del artículo ciento cuarenta y dos del Código Penal, caracterizadas, todas ellas, por un incremento constante de las penas conminadas y de los rigores de su cumplimiento. ... Cuando no sea posible esta primera posibilidad – la atipicidad de la conducta – será del caso recurrir al análisis de la procedencia de la causa de justificación centrada, con mayor relevancia, en el ejercicio legítimo de un derecho (artículo veinte, inciso ocho del Código Penal). Aquí se tendrá en cuenta el supuesto – situación de amenaza a los bienes jurídicos antes citados – y los límites o condiciones para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional comunal – rondera ya analizados. El respectivo análisis de proporcionalidad es el que debe realizarse para cumplir este cometido, para lo cual es de tener en cuenta los bienes jurídicos comprometidos con la correcta ejecución por los ronderos en relación con el derecho a la identidad cultural, el fuero comunal rondero, prevaleciendo siempre los intereses de más alta jerarquía en el caso concreto, que exige la no vulneración del núcleo esencial de los derechos fundamentales. Si la conducta atribuida a los ronderos no resulta atípica o si, en aplicación del test de proporcionalidad enunciado, la conducta analizada no está justificada, esto es, afirmando el sujeto objetivo, será del caso considerar el conjunto de factores culturales en la escala individual del sujeto procesado. Cabe acotar que el análisis en mención requiere, como presupuesto, tener muy claro la existencia jurídica de la Ronda Campesina, la autoridad rondera que actúa – la condición de tal del rondero incriminado – su nivel de representación y funciones, y las características y alcances de la norma consuetudinaria aplicada, aspectos que en varias de sus facetas puede determinarse mediante pericias culturales o antropológicas. En este nivel del examen del caso es de tener en

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. Nº 685-2010

LAMBAYEQUE

cuenta que los patrones o elementos culturales presentes en la conducta del rondero tiene entidad para afectar el lado subjetivo del delito, vale decir, la configuración del injusto penal y/o su atribución o culpabilidad, al punto que puedan determinar – si correspondiere – (i) la impunidad del rondero, (ii) la atenuación de la pena, o (iii) ser irrelevantes..... El agente, entonces, como consecuencia de su patrón cultural rondero puede actuar (i) sin dolo – error de tipo – al no serle exigible el conocimiento sobre el riesgo para el bien jurídico; (ii) por error de prohibición porque desconoce la ilicitud de su comportamiento, esto es, la existencia o el alcance de la norma permisiva o prohibitiva; o (iii) sin comprender la ilicitud del comportamiento ejecutado o sin tener la capacidad de comportarse de acuerdo a aquella comprensión.....Las normas que en este caso se han de tomar en cuenta para la exención de pena por diversidad cultural serán, en todo caso, las previstas en los artículos catorce y quince del Código Penal. Es de rigor, sin embargo, prevenir que en el caso de ronderos es de muy difícil concurrencia – aunque no imposible ni inusitado – los casos de error de tipo y, en muchos supuestos, las prescripciones del artículo quince del Código Penal – que entraña un problema no de conocimiento sino de comprensión, de incapacidad de comportarse de acuerdo con cánones culturales que al sujeto le resultan extraños-, porque los ronderos, como regla ordinaria, son individuos integrados al Estado total o parcialmente en cuya virtud al tener contacto con la sociedad "oficial" como parte de su modo de vida, aunque sea parcialmente, se les puede exigir algún tipo de conducta acorde a las normas del Estado, por lo que puede intentar motivar su conducta y, por ende, desaprobala cuando sea contraria a los intereses predominantes de la sociedad con la cual se relaciona....." . **Sexto:** Que, de autos se advierte lo siguiente: **i)** Que, mediante denuncia de parte de fecha veintidós de febrero de dos mil siete, obrante a fojas ciento cuarenta, el ciudadano Benedicto Zevallos Carranza pone en conocimiento del representante del Ministerio Público, que en horas de la tarde del día once del referido mes y año, su hermano Hernando Zevallos Carranza fue víctima de cuatro disparos con proyectil de arma de fuego, en circunstancias que se encontraba en su consultorio ubicado en su domicilio, atribuyendo dicha conducta a César Gonzáles

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

Vásquez, como autor directo, y a familiares de éste, como autores mediatos y/o intelectuales (entre éstos, Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos – agraviados en el presente proceso penal); y, **ii)** Que, los agraviados Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos, en sus respectivas declaraciones policiales realizadas en presencia del representante del Ministerio Público, obrantes a fojas ocho y diez, respectivamente, refirieron que en horas de la madrugada del día cinco de marzo de dos mil siete, un gran número de personas los sacó a la fuerza de los respectivos domicilios en donde se encontraban pernoctando en dicho momento, precisando ambos, que los llevaron a la plaza de Sillangate, luego los trasladaron a la localidad de Chipuluc - a la cual llegaron a las seis de la tarde, aproximadamente-, quedándose hasta el día siguiente en la casa del Presidente de la Ronda Campesina de la mencionada localidad – Videlmo Montenegro Vásquez, quien les brindó hospedaje y alimentación; para luego en horas de la mañana del seis de marzo de dos mil siete, por sus propios medios, dirigirse al Centro de Salud de Chipuluc, y luego retornaron a la casa del mencionado Presidente de la Ronda Comunal, para horas más tarde, en compañía de éste, dirigirse a la localidad de Cutervo para ser presentados ante la autoridad policial, sin embargo, antes, llegaron a la casa del encausado Hilario Porfirio Medina Vásquez -lugar desde donde efectuaron llamadas telefónicas a sus familiares-, habiendo sugerido este último al encausado Montenegro Vásquez, que mejor se regresen a la localidad de Chipuluc para que al día siguiente - siete de marzo de dos mil siete- se presenten ante la Asamblea de la Ronda Comunal, lo cual ocurrió en horas de la mañana del mencionado día, en donde se les imputó haber pagado una suma de dinero para que le disparesen con arma de fuego a

13

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

Hernando Zevallos Carranza (yerno de Víctor Gonzáles Villalobos), siendo encontrados inocentes de dichos cargos, liberados y puestos a disposición de la autoridad policial. **Sétimo:** Que, siendo ello así, estando a lo anotado precedentemente, debe precisarse, que las conductas imputadas a los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, con respecto a los agraviados Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos (privación de sus libertades personales – secuestro) no pueden ser pasibles de sanción penal alguna en el presente caso, debido a que sin perjuicio de indicar que este Supremo Tribunal considera que los encausados Elmer Gonzáles Díaz (hijo del agraviado Víctor Gonzáles Villalobos) y Juan Zevallos Benavides (padre de Hernando Zevallos Carranza) se encontraron presentes en el momento que los referidos agraviados fueron sacados a la fuerza de los domicilios donde se encontraban pernoctando, conforme se acredita con las versiones en dicho sentido del encausado Benedicto Zevallos Carranza (declaración instructiva de fojas ciento sesenta y seis), y los testigos María Clacilda Cruz Vásquez (declaraciones a nivel policial e instrucción, de fojas trece y trescientos veinte), Benjamin Cruz Vásquez (declaración fiscal de fojas doscientos once), Nilda Cruz Vásquez (declaraciones a nivel policial e instrucción, de fojas doscientos dieciséis y trescientos veintitrés), Herly Enedis Díaz Cubas (declaración testimonial de fojas trescientos cuarenta y dos); también lo es, que debe tenerse en cuenta, que dichas acciones no fueron realizadas en forma independiente por los mencionados encausados, sino que éstos estuvieron acompañando a la Ronda Comunal de Chipuluc, conformada por un gran número de personas, que estuvo dirigida o presidida por el encausado no habido Videldo Montenegro Vásquez, quienes fueron concretamente las personas que privaron de su libertad

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 685-2010

LAMBAYEQUE

a los aludidos agraviados, en mérito a la petición de los familiares de Hernando Zevallos Carranza - quien había sido herido de bala días antes por parte del sobrino de los agraviados, César Gonzáles Vásquez- (actuando en ejercicio legítimo de la función jurisdiccional comunal reconocida constitucionalmente a las rondas campesinas), conforme se advierte de las declaraciones a nivel policial en dicho sentido de los propios agraviados y del encausado Asunción Pérez Benavides (ver fojas ocho, diez y diecinueve, respectivamente); más aún, si se tiene en cuenta, que el Presidente de la mencionada Ronda Campesina, Videldo Montenegro Vásquez, hospedó y brindó alimentación en su domicilio a los referidos agraviados hasta el momento que fueron presentados ante la Asamblea de la Ronda Comunal, en donde se estableció sus inocencias respecto a la conducta que se les atribuía (haber pagado o colaborado para que su sobrino César Gonzáles Vásquez, efectuara disparos a Hernando Zevallos Carranza); debiéndose precisar in fine, que durante las estancias de los agraviados en el aludido inmueble, en la localidad de Chipuluc, éstos contaron con absoluta libertad ambulatoria, debido a que indicaron que se dirigieron solos al Centro de Salud de dicho lugar para atenderse de las lesiones que sufrieron el día que fueron sacados a la fuerza de sus inmuebles, luego de lo cual retornaron al domicilio del Presidente de la Ronda Comunal mencionada. Que de otro lado, teniéndose en consideración los argumentos esgrimidos, tampoco se puede atribuir responsabilidad penal al encausado Hilario Porfirio Medina Vásquez - ex Presidente de la Ronda Comunal de Chipuluc- respecto al delito de secuestro imputado, en agravio de Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos; más aún, si su participación en los hechos investigados se circunscribe a que el día seis de marzo, de dos mil siete, en

30

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

circunstancias que el Presidente de la Ronda Comunal de Chipuluc, Videlmo Montenegro Vásquez, llevó a su domicilio a los mencionados agraviados, le sugirió a éste, que aquéllos debían ser puestos a disposición de la Asamblea de la Ronda Comunal, la cual se desarrolló en horas de la mañana del día siete de marzo de dos mil siete, y en donde incluso Medina Vásquez actuó como Secretario, lo cual se advierte de las propias declaraciones de los agraviados en el desarrollo del presente proceso penal, quienes además agregaron que cuando se encontraron en el domicilio del encausado Medina Vásquez fueron atendidos cordialmente y les permitieron realizar llamadas telefónicas a sus familiares, y que en la aludida asamblea el referido encausado abogó a favor de ellos; por tanto, resulta pertinente en el caso de los encausados recurrentes, la aplicación del artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales. **Octavo:** Que, de otro lado, debe indicarse, que si bien existen suficientes medios probatorios que acreditarían que los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides -quienes refieren no pertenecer a la Ronda Campesina de Chipuluc-, conjuntamente con personas no identificadas, integrantes de la referida Ronda Comunal, penetraron sin derecho al inmueble del agraviado Francisco Cruz Horna, a efectos de sacar del interior del mismo a su yerno agraviado Víctor Gonzáles Villalobos; también lo es, que dicho hecho aconteció el cinco de marzo de dos mil siete, por tanto, estando a que el artículo ciento cincuenta y nueve del Código Penal, establece que el delito de violación de domicilio se encuentra sancionado con una pena privativa de la libertad no mayor de dos años, a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal, conforme a lo dispuesto en los artículos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL TRANSITORIA

R.N. N° 685-2010

LAMBAYEQUE

ochenta y ochenta y tres del referido Texto legal. Por estos fundamentos: declararon **HABER NULIDAD** en la sentencia de fecha veintinueve de diciembre de dos mil nueve, obrante a fojas ochocientos sesenta y cuatro, en el extremo que condenó a Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, como autores del delito contra la Libertad Personal – secuestro agravado –, en agravio de Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos; y como autores del delito contra la Libertad – violación de domicilio –, en agravio de Francisco Cruz Horna, a diez años de pena privativa de libertad, y cuatro años de pena privativa de libertad (suspendida condicionalmente por el periodo de prueba de tres años, bajo determinadas reglas de conducta), respectivamente; y, que condenó a Hilario Porfirio Medina Vásquez, como cómplice del delito contra la Libertad Personal – secuestro – en agravio de Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos, a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, bajo determinadas reglas de conducta; y fijó en tres mil nuevos soles el monto que deberán pagar solidariamente los tres interesados a favor de los agraviados Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos, y, en un mil nuevos soles que deberán pagar solidariamente los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, a favor del agraviado Francisco Cruz Horna; y **reformándola: absolvieron** de la acusación fiscal a los acusados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, como autores del delito contra la Libertad Personal, en la modalidad de secuestro agravado, en agravio de Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles Villalobos; y, al encausado Hilario Porfirio Medina Vásquez, como cómplice del delito contra la Libertad Personal, en la modalidad de secuestro, en agravio de Víctor Gonzáles Villalobos y Paulino Gonzáles

32

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 685-2010
LAMBAYEQUE

Villalobos; y **declararon extinguida la acción penal por prescripción** a favor de los encausados Elmer Gonzáles Díaz y Juan Zevallos Benavides, por el delito contra la Libertad, en la modalidad de violación de domicilio, en agravio de Francisco Cruz Horna; **ORDENARON:** la inmediata libertad del encausado Elmer Gonzáles Díaz, siempre y cuando no subsista en su contra orden de detención emanada de otra autoridad judicial competente, oficiándose a la Sala Penal respectiva, para los fines pertinentes; **DISPUSIERON:** la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieren generado en contra de los precitados, a causa del presente proceso y fecho archívese definitivamente los de la materia en cuanto a los referidos absueltos; y **NO HABER NULIDAD**, en lo demás que contiene; y los devolvieron.-

S.S.

RODRÍGUEZ TINEO

BIAGGI GÓMEZ

BARRIOS ALVARADO

BARANDIARÁN DEMPWOLF

NEYRA FLORES

NF/rjmr

SE PUBLICO CONFORME A LEY

MIGUEL ANGEL SOTELO TASATCO
SECRETARIO(e)
Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA